

Las 'nóminas' públicas superan en medio millón al sector privado

El coste total de funcionarios, jubilados o parados rebasa los 300.000 millones

En España hay casi medio millón más de personas recibiendo algún tipo de retribución o transferencia pública que un salario del sector privado, con cifras de cierre de 2021. Concretamente, son 496.776 más

quienes reciben una prestación o nómina por parte del Estado. Una cifra cercana al nivel de 2019, cuando la diferencia ascendía a 530.000 transferencias públicas más que las procedentes del sector privado, pe-

ro que sí experimenta una notable mejora en los últimos doce meses, ya que a cierre de 2020, y como producto del impacto de la pandemia, nuestro país contabilizó a 1,4 millones de personas más recibiendo una

retribución pública que privada. Este saldo, más allá, supone un riesgo claro estructural para las arcas del Estado, que afronta facturas mastodónticas entre sueldos públicos, pensiones y prestaciones. **PÁG. 22**



Las retribuciones públicas rebasan en 496.776 a los sueldos privados

El coste de las transferencias del Estado a los 14,5 millones de beneficiarios supera los 300.000 millones

Los expertos advierten riesgo de 'gigantismo' del sector público si se desborda el déficit

Gonzalo Velarde MADRID.

En España hay casi medio millón más de personas recibiendo algún tipo de retribución o transferencia pública que un salario del sector privado, con cifras de cierre de 2021. Concretamente, son 496.776 más quienes reciben una prestación o nómina por parte del Estado. Una cifra cercana al nivel de 2019, cuando la diferencia ascendía a 530.000 transferencias públicas más que las procedentes del sector privado, pero que sí experimenta una notable mejora en los últimos doce meses, ya que a cierre de 2020, y como producto del impacto de la pandemia, nuestro país contabilizó a 1,4 millones de personas más recibiendo una retribución pública que privada.

Este saldo, más allá, supone un riesgo claro estructural para las arcas del Estado, que afronta facturas mastodónticas entre sueldos públicos, pensiones y prestaciones por desempleo, y que amenaza con abrir brechas de déficit público que podrían acabar impactando negativamente precisamente en algunos de los colectivos beneficiarios de estas transferencias, y que podrían verse afectados por recortes.

Este hecho, más allá, según explica el doctor en Economía, Daniel Lacalle, puede "provocar un aumento del déficit estructural, y pone en peligro los salarios públicos", ante una "necesidad de mayor carga impositiva" para hacer frente a estos desembolsos anuales, lo que en última instancia podría "dañar el crecimiento económico".

De hecho, explica Lacalle que el panorama es poco alentador sobre este aspecto, ya que "en los próximos meses nos obligarán a ajustarnos el cinturón" desde las instancias comunitarias, para realizar un control de gasto público, del que se ha eximido a los países en los dos últimos años para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. Sin embargo, la recuperación de las reglas fiscales parece inminente, y ello obligará a los países europeos a recuperar las sendas de déficit. Precisamente, en un encuentro reciente entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, el primero aseguraba que las reglas fiscales de la Unión Europea son "demasiado complejas y difíciles" por lo que el Gobierno de España considera necesario reformarlas para la era post-pandemia, mientras que

Un techo de gasto estratosférico

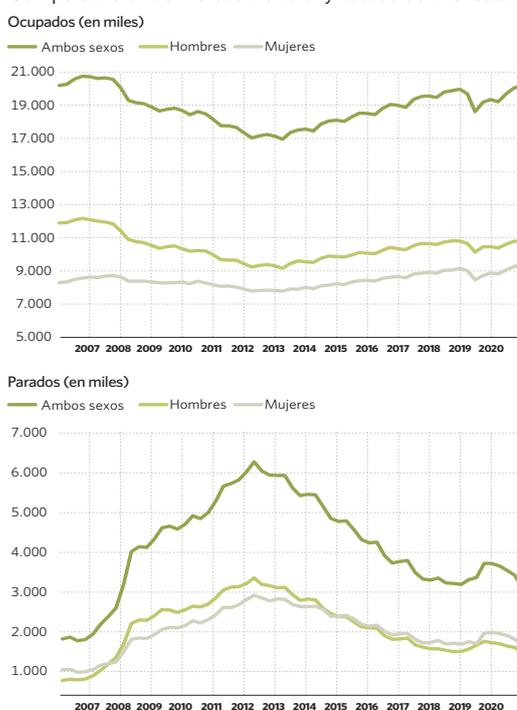
Para poder llevar a cabo todos los compromisos de gasto anuales del Estado, el límite de gasto no financiero aprobado por el Consejo de Ministros para 2022, se situará en 196.142 millones de euros, cifra similar a la de 2021, cuantificada en 196.097 millones. En ese sentido, si se descuentan los recursos procedentes de la UE, el techo de gasto se cifra en 169.787 millones de euros, un 0,7% más que el año anterior. En relación con los fondos comunitarios, el techo de gasto para 2022 incorporará 26.355 millones de euros de los fondos europeos, de los que 25.622 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 733 millones al REACT. El grueso de los fondos REACT son recursos para las comunidades autónomas. Para lo que Hacienda ya asignó 8.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022 a las comunidades.

el germano aseguró que el Pacto de Estabilidad ya ha mostrado su capacidad de flexibilidad durante los peores meses de la crisis sanitaria, si bien considera necesario "volver a tener un colchón fiscal" para el medio plazo, advirtiendo la necesidad de reducir los niveles de deuda pública en los estados miembro.

Mejora del saldo

De este modo, si nuestro país encara la nueva década con ese saldo anteriormente mencionado (correspondiente al cierre de 2019) de 530.000 personas más con transferencias públicas que privadas, en dos años, apenas se ha reducido este nivel en 33.000 personas. Entre medias, el impacto de la pandemia es relevante. De hecho, la diferencia de casi un millón de personas entre el saldo de 2020 y el de 2021 se debe al medio millón parados que en los últimos doce meses ha dejado de percibir prestación por desempleo por un lado y a la ganancia de más de 700.000 trabajado-

Comparativa entre mercado laboral y Estado del Bienestar



Transferencias financieras del sector público y sector privado.

CONCEPTO	2020	2021
Empleo privado	16.241.500	16.974.200
Empleo autónomo	3.092.200	3.198.000
Transferencias del sector privado	13.149.300	13.776.200
Empleo público	3.379.100	3.475.500
Beneficiarios desempleo	2.299.575	1.842.238
Pensionistas	8.899.064	8.955.154
Transferencias del sector público	14.577.739	14.272.976
Saldo público/privado	1.428.439	496.776

Fuente: INE, SEPE y Seguridad Social.

elEconomista

res del sector privado, por la fuerte creación de empleo experimentada en los últimos meses de recuperación económica.

Más allá, el cálculo de transferencias de cierre de 2021 atiende al volumen de empleados del sector privado a cierre de año recogidos en las estadísticas de la EPA publicada hace escasos días por el INE, que

se situó en los 16.974.200 trabajadores, de los que se restan los 3.198.000 de autónomos, por lo que el volumen de nóminas de asalariados del sector privado se sitúa en los 14,2 millones de personas. Mientras que las transferencias públicas se concentran tras sumar el número de pensionistas de alta en la Seguridad Social, que asciende a 8.899.064

personas, a las que se suman los 3.475.500 empleos públicos que recoge la EPA, correspondientes a todos los niveles territoriales de la Administración Pública, y el 1.842.238 de parados que a cierre del pasado ejercicio se encontraba percibiendo una prestación de desempleo. En suma un total de 14,5 millones de personas recibiendo este tipo de transferencias del sector público.

Presión sobre las cuentas

Más allá, cabe recordar el coste que supone cada año estas transferencias del Estado, que en suma ascienden a más de 300.000 millones de euros, entre los que habría que contabilizar los 150.000 millones de gasto en pensiones, más otros 140.000 millones abonados en nóminas de trabajadores de la Administración, y otros 18.000 millones más que se destina de media anual al desempleo en España.

Con estas cifras, la presión sobre las cuentas públicas se hace más acuciante. Según el panel de

A cierre de 2020, había 1,4 millones más de 'nóminas' públicas debido a la pandemia

expertos de Funcas, esperan un déficit público del 5,4% para este año, por encima de la previsión del Gobierno (5%). En cuanto a 2021, el consenso apunta a un déficit del 7,4%, tasa que se ha reducido cinco décimas respecto al anterior panel y que es inferior a la previsión del Gobierno (8,4%).

Así, el Gobierno estima que el déficit público se situará en 2022 en el 5% del PIB, lo que supone una reducción de 3,4 puntos respecto al 8,4% previsto para 2021. Se trata una de las mayores disminuciones del déficit de la serie histórica. "Un comportamiento positivo debido a la reactivación de la economía, con motivo del buen ritmo de vacunación y la recuperación de los niveles de empleo", apunta el Ejecutivo señalando que el déficit pasará del 11% del PIB alcanzado en 2020 al 5% en 2022. "Es decir, en dos años el déficit público se reducirá en más de un 50% y se situará en menos de la mitad de lo marcado en 2020", señalan desde el Gobierno.